

HAITÍ: EL INTENTO FALLIDO DE CONSTRUIR UNA DEMOCRACIA SIN ESTADO

POR SONIA ALDA MEJÍAS

INTRODUCCIÓN.

La violencia, la polarización política y social, el colapso económico y la falta de los recursos más básicos sólo son algunos de los sombríos enunciados con los que es posible describir la realidad haitiana. El objeto del presente capítulo es analizar las causas que provocan la crisis estructural que sufre Haití, hasta el punto de haber sido catalogado como ejemplo paradigmático de Estado fallido. Para ello se abarcará un período cronológico que contempla la dictadura hereditaria duvalierista, de 1957 a 1986, y la transición democrática, inmersa en avances y retrocesos, hasta la caída de Aristide, en febrero de 2004. En este lapso de tiempo se encuentran buena parte de los factores que determinan la actual situación haitiana. La mayoría de los problemas, como se verá, son consecuencia directa de la inexistencia de un poder estatal. Factor imprescindible para explicar la situación de caos endémico de esta sociedad.

La naturaleza de la crisis haitiana ha de ser explicada de manera multicausal. Aunque el punto de partida de este análisis es evitar cualquier determinismo, además de los factores económicos y sociales se prestara particular atención a los políticos, y muy especialmente a la *estructura de poder político* predominante. Tomando como referencia esta cuestión quizás sea posible responder a interrogantes que ningún otro factor puede dar respuesta. En efecto, los datos económicos o sociales sitúan a Haití entre los países más pobres del mundo. No obstante, las protestas, que han desembocado en actuaciones violentas, no sólo se han ceñido a reivindicaciones de carácter económico. El nivel de violencia y las masacres tampoco pueden explicarse únicamente por esta causa. Sin embargo, si consideramos la estructura del poder político es posible entender mejor, no sólo esta crisis, sino la forma en que se manifiesta y su persistencia.

La ambición de presentar, en estas páginas, una visión analítica de los problemas fundamentales de la sociedad haitiana exige, antes de entrar en el estudio político, una perspectiva general que proporcione una idea de la realidad que va a ser objeto de estudio y que ha sido considerada como un ejemplo de Estado fallido. Con todo a pesar de la utilidad de este concepto para el caso haitiano, el término podría inducir a error pues puede hacer suponer que ha existido un Estado haitiano, sometido posteriormente a un proceso degenerativo. Sin embargo, como se pretenderá demostrar, el problema estructural de esta sociedad ha sido la inexistencia de un poder estatal que rigiera la vida política y social bajo un sistema legal para todos los individuos y todo el territorio.

DATOS SOBRE LA REALIDAD HAITIANA.

Datos generales de carácter étnico, social y económico. (3)

Con una extensión de 27. 750 Km², Haití ocupa un tercio de la Isla La Española, según su nombre colonial, que comparte con la República Dominicana. Estas repúblicas están separadas por 360 kilómetros de frontera. De acuerdo a los datos más recientes posee una población de 8.300.000 (4), que de acuerdo a su identidad étnica esta integrada por un 95% de raza negra. El 5 % de sus habitantes se reparten entre un 4,9% de mulatos y sólo un 0,1% son blancos. Un factor de diferenciación que ha determinado la marcada desigualdad en el reparto de poder político y económico de la sociedad haitiana ha sido el factor étnico. La minoría mulata se ha constituido tradicionalmente como el grupo dominante y, para garantizar esa situación de privilegio, ha adoptado diferentes estrategias de diferenciación para asegurar su supervivencia y no acabar confundidas con el resto de la población. De esta manera se han esforzado por definirse por oposición a la mayoría negra, manteniendo su adscripción a la cultura occidental, particularmente francesa, y adoptando el francés como lengua materna y no el creole, el idioma de las clases más populares. Su confesión religiosa es católica frente al vudú, cuyas prácticas y creencias siguen la mayoría. A estas diferencias se suman la más visible, el color de la piel. Para mantenerse claros han adoptado una rigurosa estrategia endogámica y políticas matrimoniales orientadas a lograr uniones con blancos o mulatos claros de piel con el objeto de “blanquearse”

(3) En esta dirección se han reunido de forma exhaustiva y completa todos los datos referentes a Haití: <http://lanic.utexas.edu/la/cb/haiti/>.

(4) Esta cifra se corresponde con 2003, sin embargo el “*Haití Country Profile*”. The Economist. May 2005 prevé que para 2004, la cifra alcanzó el 8’4. p .5

(5). Estas diferencias han llegado a construir mundos diferentes dentro de la misma sociedad haitiana, regulados por códigos políticos, sociales y culturales distintos y ajenos el uno al otro.

Esta estructura social basada en una abismal desigualdad, que en este caso mantiene al 80 % de la población por debajo del índice de la pobreza, no es extraña a la realidad latinoamericana, sin embargo el caso haitiano alcanza su máxima expresión pues es el país más pobre de toda América Latina. A pesar de haber modificado su posición dentro en los informes de desarrollo humano del PNUD a finales de los noventa, la situación es alarmante. En 1998, Haití ocupaba en estos informes la posición 157, en 1999, la 150 y en 2000, la 134. Además debido a la agudización de la crisis política que bloquea el país desde 2000, la situación ha vuelto a empeorar progresivamente como evidencian los indicadores de desarrollo humano de 2004 y 2005(6).

Prestando atención a algunos de los elementos adoptados para medir el desarrollo humano es posible comprobar con más detalle la dramática situación del país. Bajo una fuerte presión demográfica (7), el crecimiento de la población en 2005 será de un 2.26 %. También para este año se calcula que el índice de natalidad estará en torno 36.59 ‰ y el de mortalidad será del 12.34 ‰. La esperanza de vida al nacer es de 52.92 años. La población haitiana, en coherencia con estos datos, es muy joven con una media de edad de 18,03 años (8)

Este cuadro demográfico revela la realidad de un país que carece de los servicios de sanidad más básicos. Haití es el país del continente americano que menos dinero gasta per-cápita en salud. El 28 % de la población tiene acceso a la sanidad. Únicamente el 46 % de la población puede utilizar agua limpia (9). El SIDA es un grave problema, el 5,6 % de la población se encuentra afectada por el virus. La situación en educación también sitúa a Haití en la cola de

(5) STOTZKY, IRWING. *“Silencing the Guns in Haití, The promise of deliberative democracy”*. The University of Chicago Press. Chicago-London. 1997. pp. 20-24.

(6) *“Indicadores de desarrollo humano” de 2004 y 2005. En el documento de 2004 ocupa el lugar 150 y n el de 2005, el puesto 153.*

(7) Según El Banco Mundial en 2002, Haití superaba la media de crecimiento de la población de América Latina y El Caribe. Mientras que esta era del 1.8 %, la media haitiana era del 2 %. Véase *“Haití Country Overview”*. World Bank Group. www.worldbank.org/ht. p. 4.

(8) Todos los datos demográficos señalados se encuentran en *“The World Factbook”*. <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html>.

(9) La media para América Latina y El Caribe en 2002 era del 86 % de la población. *“Haití Country Overview”*. p. 4.

América Latina (10). Se calcula que el 52,9% de la población es alfabeta, siendo un 54,8% hombres y un 51,2% mujeres. (11)

Los datos económicos terminan de dibujar la situación del país. La economía se ha basado, desde siempre, en la agricultura. La industrialización fue débil y tardía y se limitó a las industrias de ensamblaje o maquilas de capital extranjero. La agricultura mantiene estructuras arcaicas. Se estima que el sector primario ocupa al 66 % de la población activa, el sector secundario al 9% y el sector servicios al 25 %. La escasa productividad agrícola y el fuerte crecimiento demográfico han dado lugar a un proceso incontrolado de deforestación que afecta al 97 % de la superficie de la isla. Durante un tiempo, el turismo pudo ser una importante fuente de ingresos pero la inestabilidad política, desde finales de la década de los ochenta, impidió su desarrollo. El único ámbito que ha experimentado un crecimiento espectacular ha sido el de la economía informal. Se estima que en 2002, dos terceras partes de la población sobreviven gracias a este sector de la economía (12). Con esta estructura de fondo, los indicadores económicos y financieros presentan valores negativos y decrecientes, como en el caso del producto interior bruto, aunque las previsiones para 2005 y 2006 presenten cierta mejora (13). La inflación en 2003 alcanzó el 39.3%, en 2004, el 22.8 y se estima que este índice se ubicará en 2004 y 2005 en el 13.3 y el 15 % respectivamente (14). Un dato económico muy importante en la economía haitiana, pero imposible de calcular, son los ingresos proporcionados por el narcotráfico. Desde los años ochenta Haití comenzó a constituirse en un punto de escala y almacenaje de droga idóneo debido a la incapacidad de las autoridades para controlar esta actividad e incluso a la implicación de las mismas en dicho tráfico. Todo indica que se ha convertido en una fuente de ingresos imprescindible para diferentes sectores de la sociedad desde los más pudientes a los más humildes. (15)

(10) Ibidem.

(11) “*The World Factbook*”. Op. cit. Datos estimados para el año 2003.

(12) Ibidem.

(13) Véase su evolución anual desde 2000 y las previsiones futuras en “*Haití Country Profile*”. The Economist. 2004 y 2005. En 2000, el 0.09 %; en 2001, el -1.1 %; en 2002, el -0.9 %; en 2003, el 0.4 %; en 2004, el -3,8%; en 2005, el 3.5 % y en 2006, el 3.0 %.

(14) Ibidem. Los informes citados presentan un completo análisis sobre los principales indicadores económicos y financieros.

(15) GAMARRA, EDUARDO; ROGERS, JOSEPH. “*Transiciones perversas y patrones del narcotráfico en Cuba, República Dominicana y Haití*” y RODRIGUEZ BERUFF, JORGE. “*Entre la narcodemocracia y el Leviatan “antidrogas”: fuerzas de seguridad, Estado populista y nuevas formas de autoritarismo en el Caribe*” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998. pp. 209-238 y pp. 183-199, respectivamente.

Desde hace años, la dependencia de la ayuda internacional para reconstruir la economía es absoluta, sin embargo para esta tarea no basta con la cooperación y la financiación internacional. Como la misma experiencia ha demostrado mientras no se resuelva la crisis político-institucional que esta colapsando el país, desde el inicio de la transición democrática, cualquier proceso de transformación a medio y largo plazo será un fracaso. Parece entonces necesario analizar la Historia haitiana reciente para entender las causas de dicha crisis y los factores que la han determinado.

PERSPECTIVA GENERAL DE LA HISTORIA RECIENTE. UNA HISTORIA POLÍTICA SIN ESTADO.

Haití es el único país de América Latina catalogado como Estado fallido. Ciertamente ateniéndonos a las características que definen esta situación coinciden plenamente con la realidad haitiana:

- Una situación de violencia prolongada donde las facciones enfrentadas se disputan el control de los recursos nacionales.
- Bandas armadas que sin aspirar a alcanzar el poder tienen el control de determinadas áreas del territorio del país.
- Un grave deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos que carecen de los servicios más básicos (salud, vivienda, educación, justicia) e infraestructuras.
- Desmoronamiento de las estructuras que garantizan un mínimo de estabilidad y seguridad. Las Fuerzas Armadas, en el caso haitiano, la policía son capaces de mantener el orden y el cumplimiento de la ley.

La causa principal de esta situación, siguiendo con la caracterización de los Estados fallidos, es la inexistencia total o parcial del imperio de la ley y el orden institucional y social de una nación, en otros términos el Estado no posee el monopolio de la fuerza (16). La existencia de un aparato burocrático administrativo no significa que exista tal poder estatal. La administración y sus recursos se emplea por cada gobernante y sus seguidores como patrimonio particular y medio de enriquecimiento.

(16) “Desafíos a la Seguridad Internacional”. FLACSO-Chile. <http://www.flacso.cl/flacso>. pp. 3-4.

Sin embargo, a pesar de la validez de este concepto para clasificar y caracterizar la situación de Haití, el mismo podría inducir a pensar que en algún momento existió un Estado en esta república. El drama de esta sociedad no es haber sufrido un proceso degenerativo en el que se han debilitado el poder estatal hasta desembocar en una situación de crisis y colapso, sino que tal poder nunca se ha llegado a constituir. El planteamiento que se desarrollará en las siguientes páginas se centrará en poner de manifiesto que en Haití no se ha logrado construir un poder estatal, causa fundamental que explica su realidad histórica y actual. La adopción de ese presupuesto permite entender las claves de la dictadura duvalierista y su estabilidad, así como el caos y la violencia que han impedido alcanzar la democracia en un proceso de transición iniciado en 1986, tras la caída de Jean Claude Duvalier, y que hoy día sigue sin resolverse.

Este período ha sido simplificado ya que las versiones históricas realizadas han estado sumamente politizadas. Muchos de los estudios realizados se han centrado en denunciar la represión del régimen duvalierista, sin entrar a estudiar en profundidad cuales fueron los mecanismos que hicieron posible la pervivencia de este régimen a lo largo de veintinueve años. De acuerdo al planteamiento expuesto más arriba se trata de poner de manifiesto la complejidad de un régimen dictatorial, cuya pervivencia no sólo se basó en la represión. Respecto a la transición, igualmente la versión dominante ha impedido ver las causas que han bloqueado la implantación de la democracia. La acusación generalizada a los duvalieristas o neodualieristas y/o a los militares de querer implantar nuevamente una dictadura no da respuesta a problemas estructurales que trascienden a la acción particular de unos actores en concreto. Esta visión no termina de explicar el desarrollo de una transición democrática, en la cual cada avance se frustra por un golpe de Estado como en 1987, 1988, 1991; o por elecciones fraudulentas como en 1995, 1997, 1999 y 2001, sin olvidar el trasfondo de violencia y caos que caracteriza todo el período.

La existencia de una estructura de poder no estatal es un factor decisivo para explicar la dictadura de los Duvalier, así como para entender los problemas de la transición. Ante la ausencia de un poder estatal, el motivo fundamental por el que los Duvalier se mantuvieron en el poder y lograron la estabilidad política fue su reconocimiento como un poder preeminente, por parte del resto de las facciones que competían por el poder. El complejo sistema de acuerdos y redes clientelares establecidas, junto a la represión aplicada por el régimen, lograron establecer un orden, a pesar de la inexistencia de un Estado. No obstante la estructura de poder organizada para lograr aquel orden y estabilidad fue, al mismo tiempo, un obstáculo para construir un poder estatal mediante el cual fuera posible establecer el imperio de la ley, la garantía de una única

norma para todos los ciudadanos o de un sistema judicial imparcial (17), tanto antes como durante el período de la transición.

Al iniciarse la transición a la democracia, a partir de 1986, tampoco se establecen las bases de un poder estatal. La gran diferencia respecto a la etapa anterior es que ningún aspirante al poder logra ser reconocido como un poder preeminente por el resto de los rivales. Este aspecto impidió poner freno a la espiral de una crisis que, desde el inicio de la transición, adoptó tintes cada vez más dramáticos debido fundamentalmente a la incapacidad de crear un orden de la naturaleza que sea. Por un lado, los actores políticos rompen los equilibrios de poder establecidos durante la dictadura de los Duvalier, pero al mismo tiempo, son incapaces tanto de recomponer un nuevo orden, basado en la misma lógica no estatal que ha organizado la estructura de poder dominante hasta el momento; como de construir las bases de un poder estatal. La consecuencia directa es que no hay ningún orden ni estatal ni de otra naturaleza. Ningún actor respeta código alguno formal-legal o informal. El resultado es que lejos de lograr una democracia, para superar la dictadura hereditaria, a la que ha estado sometida el país, se establece una transición “interminable” (18), dominada por una situación anárquica de todos contra todos, bajo un criterio excluyente en el que no existe la más mínima certidumbre legal, ni jurídica, pues ninguno de los actores, civiles y militares, respetan código alguno. Por este motivo todas las esperanzas de encauzar un proceso democrático son permanentemente frustradas.

Como veremos, a lo largo del período analizado, en Haití no ha existido un poder estatal, aunque si otros poderes. Éstos se podrían definir por oposición a un poder estatal que, de acuerdo a la concepción liberal, es esencialmente impersonal, único y unitario, y por ello posee el monopolio de la fuerza. En contraposición a estas características el poder ha sido personal, a lo sumo preeminente y ha estado compartido mediante un complejo sistema de mediaciones. Entre las múltiples consecuencias derivadas de esta estructura de poder ha estado la imposibilidad de establecer un orden legal general y único para todos los ciudadanos, basado en el imperio de la ley.

(17) Sobre la organización de un orden político estable sin un poder estatal en América Latina, véase ESCALANTE, FERNANDO. “*De la transición al desencanto. Democracia y Estado en América Latina*”. <http://clas.uchicago.edu/eventarchive/transicion%20al%20desencanto.pdf>. pp. 1-14.

(18) MANIGAT, SABINE . “*Haiti en la postguerra fría: La relación cambiante Estado/sociedad*” en W. LOZANO. Op. cit. pp. 64-65. Este es el calificativo empleado para definir la transición. Esta es una etapa de des-construcción donde predomina la atomización y el desorden donde los actores no son capaces de lograr un nuevo equilibrio.

Un período inédito de estabilidad política en la Historia haitiana. La dictadura hereditaria de la Dinastía Duvalier. De François Duvalier a Jean Claude (1957-1986)

François Duvalier accedió al poder el 22 de septiembre de 1957 y ejerció la presidencia de la República hasta su muerte en abril de 1971. Jean-Claude, su hijo, con diecinueve años, fue nombrado sucesor por su padre y asumió oficialmente el poder el 22 de abril de 1971. Su presidencia finalizó el 7 de febrero de 1986, debido a la presión generada por las movilizaciones populares que pidieron el final el régimen.

F. Duvalier, un médico de profesión, accedió al poder mediante las primeras elecciones celebradas con sufragio universal en Haití. Antes de acceder al poder como presidente, fue un miembro del gabinete de gobierno creado por el Dumarsais Estimé, presidente electo, en 1946. Su presidencia finalizó con un golpe de Estado liderado por Paul Magloire, que también acabó su presidencia mediante otro golpe Estado. Después de seis meses, en los que se sucedieron seis presidentes provisorios, se celebraron las elecciones que dieron la victoria a Duvalier (19). Desde entonces sus promesas de democracia y libertades comenzaron a ser incumplidas. En poco tiempo reprimió cualquier protesta social y/o política, restringió derechos y libertades y persiguió a aquellos que optaron por permanecer como opositores... El símbolo de la represión fueron los Tonton Macoutes, una milicia popular en origen que fue empleada como instrumento del Presidente para reprimir la disidencia. La mejor expresión de su dictadura fueron las propias Constituciones del régimen. En éstas se pretendieron legalizar primero su presidencia vitalicia y después la presidencia hereditaria mediante la cual su hijo, Jean Claude, accedió al poder en 1971.

La represión sin embargo no fue el único instrumento de la dictadura, para mantenerse en el poder necesitó de las adhesiones de los diferentes actores sociales. Duvalier desplegó una estrategia de negociación y una cadena de intermediación clientelar, sustitutiva de una estructura estatal, mediante la cual accedió a los diferentes sectores sociales, obteniendo así el suficiente apoyo para gobernar. Los apoyos logrados se consolidaron mediante acuerdos específicos que exigieron la permanente modificación de la ley vigente, pues era preciso satisfacer los diferentes

(19) Esta dinámica política alternada por la celebración de elecciones y derrocamientos es característica en la Historia política contemporánea haitiana, VON GRAFENSTEIN, JOHANNA. *“Haití”*. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Alianza Editorial Mexicana. México D.F. 1988. No obstante Haití no representa un caso aislado en este sentido, ALDA MEJIAS, SONIA. *“El derecho de elección y de insurrección en Centroamérica. Las revoluciones como medio de garantizar elecciones libres”* en C. DARDÉ y C. MALAMUD (eds.). *Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y América Latina*. Universidad de Cantabria 2004. pp. 115-142.

intereses de cada uno de los sectores implicados. El poder personal de F. Duvalier estableció una lógica no estatal que si bien garantizó un período de estabilidad inédito en la Historia haitiana, al mismo tiempo impidió la creación de un poder estatal.

Origen y legitimidad del poder duvalierista. Presidencia hereditaria y todopoderosa, según las Constituciones del régimen.

A través de las Constituciones promulgadas por la dinastía Duvalier es posible analizar la construcción del régimen duvalierista y su principal particularidad, su carácter vitalicio y hereditario. Padre e hijo tuvieron el particular empeño de pretender legalizar y legitimar sus respectivas dictaduras al reflejarlas en textos constitucionales. El propio Jean Claude Duvalier pretendió conciliar su mandato con una apertura democrática, sometiendo a referéndum el carácter vitalicio de su presidencia y el poder de transferirla, de nuevo, tras su muerte.

Cuando F. Duvalier accedió al poder, su mandato constitucional era por seis años. Ante la intención de reelegirse disolvió las cámaras y en las elecciones legislativas en el reverso de las papeletas del voto estampó su nombre de modo que cada voto se contó también como un voto a favor de su reelección. Así fue nombrado nuevamente presidente, el 22 de mayo de 1961. El 1964 se reformó la Constitución para incluir la presidencia vitalicia.

Al morir François Duvalier, su título de presidente vitalicio pasó a manos de Jean-Claude, su hijo de diecinueve años. La sucesión quedó legalizada con la promulgación de las modificaciones de 1970 y 1971 introducidas a la Constitución de 1964 (Arts. 91 y 100) mediante las cuales se reducía de 40 a 18 años, la edad para ocupar la presidencia y se confería a François Duvalier el poder para designar sucesor a su hijo. Además de ello el artículo 104 establecía también vitalicia esta nueva presidencia. Estas disposiciones se introdujeron en la Constitución de 1983, que nombraba presidente vitalicio a Jean-Claude Duvalier y se agregaba el derecho de éste a designar a su sucesor, quien, a su vez, se convertiría también en presidente vitalicio después de ser “ratificado” por el pueblo (20).

Las mismas Constituciones aseguraban el sometimiento de los poderes del Estado a la voluntad del Presidente. No sólo legitimaron el poder vitalicio y hereditario de la presidencia

(20) Las Constituciones citadas se encuentran en MARIÑAS OTERO, LUIS. “*Las Constituciones de Haití*”. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid 1968.

sino también el estricto control de ésta sobre el resto de los poderes y de las Fuerzas Armadas. En ninguno de los textos constitucionales de este período existía fiscalización, ni mecanismo de revisión para el poder ejecutivo. El poder legislativo se limitó a ratificar las iniciativas y los decretos presidenciales. El Presidente tenía capacidades que impedían la independencia del legislativo. Su actividad se limitaba a tres meses. El resto del año, el Presidente tenía “plenos poderes” conferidos por la Constitución, cuestión regulada en las Constituciones de 1964/1971/1983, las más importantes garantías individuales fueron suspendidas cada año, por largos períodos, de manera rutinaria. Tampoco era posible la independencia del poder judicial, pues del Presidente dependía el nombramiento de los jueces (21).

Mecanismos de control del “Rey Sol del Trópico” (22): consenso y represión.

Incluso la bibliografía volcada en expresar la férrea dictadura ejercida por el dictador ha debido mencionar no sólo la represión ejercida por François Duvalier, sino también los apoyos logrados en los diferentes sectores de la sociedad, ya que ningún poder puede mantenerse exclusivamente mediante la represión. Los intelectuales haitianos más críticos con el dictador han debido reconocer “un mérito que nadie puede negar al dictador...su talento para manejar los hilos de la política nacional. Duvalier se ha revelado un prestidigitador que domina perfectamente el pequeño mundo de la política haitiana” (23). Sin embargo necesitó controlar más que el pequeño círculo de la política para preservar su presidencia. Duvalier empleó diferentes medios y lenguajes políticos y culturales para llegar a todos los haitianos. De acuerdo a las divisiones étnicas, culturales, religiosas y lingüísticas sobre las que la minoría mulata había basado su dominación, respecto a la población negra, se llega a construir una desigualdad, basada en unas diferencias que habían trascendido lo meramente económico (24). De acuerdo a Fernando Escalante esta desigualdad existente es de tal dimensión que ha llegado a establecer modos de vida distintos, separados por “una brecha civilizatoria”. De esta forma en la misma

(21) Para un estudio más profundo sobre las disposiciones constitucionales respecto al poder ejecutivo y su relación con los otros poderes, véase “*Las Constituciones de Duvalier. El sistema legal y político en Haití*”. Capítulo I. Informe de la situación de los derechos humanos en Haití. OEA 1988. <http://www.cidh.oas.org/countryrep/Haiti88sp/indice.htm>.

(22) Con estos términos ha sido calificado François Duvalier por GERARD PIERRE, CHARLES. “*Radiografía de una dictadura. Haití bajo el régimen del doctor Duvalier*”. Editorial Nuestro. México 1969. p. 88. El juego de palabras esta justificado debido a la identificación que el propio dictador hizo entre él y el país, como parte del misticismo con el que pretendió caracterizar su liderazgo. El autor ha recogido algunas frases del dictador: “Yo soy la nueva Haití. Querer destruirme es querer destruir Haití. Es por mí que Haití alienta, y por ella que existo yo”.

(23) Ibid. p. 94.

(24) Sobre las diferencias de carácter económico, lingüístico, religioso y cultural entre negros y mulatos véase páginas 2 y 3 de este capítulo.

sociedad haitiana había y hay diferentes culturas políticas, conjuntos de valores distintos regulados en cada caso por una idea de autoridad y de representación concreta. Este aspecto se ve agudizado por la inexistencia de un poder estatal que, mediante el ejercicio de una misma autoridad en todo el territorio y para todos los ciudadanos, hubiera logrado homogeneizar todos los aspectos mencionados o al menos crear referencias comunes (25).

La capacidad de Duvalier de comunicarse con estos diferentes “mundos”, de acuerdo a sus respectivos códigos, le proporcionó la identificación de la mayoría negra, clases populares y medias, con su régimen traducándose en apoyos desde estos sectores. En primer lugar, se dirigió a la población negra, en general, para denunciar el dominio histórico ejercido por la elite mulata. Desde antes de acceder a la presidencia, mediante diferentes publicaciones promovió la identidad esencialmente africana que tenía Haití, frente a la europea de la elite; denunció que los héroes nacionales desde la Independencia habían sido negros pero quien se había apropiado de los recursos había sido la elite mulata. A su entender, el poder negro debía tomar el poder y acabar con la hegemonía de los mulatos (26). Respecto a la clase media, en particular, fue su principal apoyo, pues fue la principal beneficiada de este proyecto político al formar parte de la elite gobernante. Pero la reivindicación de la identidad y cultura negra también le proporcionó apoyos de las clases más desfavorecidas. La protección y la promoción del vudú le proporcionó un ámbito de identificación incluso con el campesinado y los grupos más populares. El mismo presidente asumió el cargo de sacerdote mayor del culto vudú “gran hougan” y a través de los sacerdotes menores ejerció una inmensa influencia por todo el país (27). Además de la identificación religiosa, el calificativo con el que popularmente fue identificado Duvalier, “Papa Doc”, demuestra la adopción por parte de éste de una imagen paternalista de la autoridad, próxima a las concepciones políticas de la mayoría de la población.

La Iglesia católica no quedó al margen, tras la expulsión del clero extranjero, que apoyaba a su competidor electoral y era aliado de la elite tradicional, tuvieron acceso a la jerarquía eclesiástica sacerdotes negros, con los que la mayoría de los feligreses se encontraba más

(25) ESCALANTE, Op. Cit. pp. 8-9.

(26) FERGUSON, JAMES. “*Papa Doc Baby Doc. Haiti and the Duvaliers*”. Basil Blackwell. Oxford 1988. pp. 31-36. Este planteamiento no era nuevo. Después de 30 años de gobiernos mulatos, D. Estimé defendió la hegemonía de la mayoría negra frente a los mulatos, planteamiento que llevo a su máxima expresión Duvalier.

(27) BRICEÑO VASQUEZ, CARLOS. “*Haití. Mito y Realidad. Compendio de su Historia Política, 1789-1988*”. Miguel Ángel García e hijo. Caracas 1989. pp. 42-43. Por primera vez se hacían públicas las visitas de los sacerdotes al palacio presidencial. Algunos de ellos tuvieron importantes cargos, como en la policía política.

identificada y a su vez esta nueva jerarquía también lo estaba con el régimen duvalierista que había hecho posible su ascenso.

La creación de una elite negra, no se realizó a costa de la elite mulata tradicional, a pesar de la virulencia y de la radicalidad del discurso del Presidente sobre el poder negro, ésta pronto comprobó que la agresión no era más que verbal. También Duvalier se dirigió a ellos de acuerdo a su “lenguaje y referentes políticos” para asegurarles el mantenimiento de su statu quo, a cambio de su apoyo o cuanto menos su compromiso de no resistir su poder (28).

Con aquellos que presentaron una firme oposición se aplicó la represión. El instrumento represivo que empleó el presidente para acabar con cualquier resistencia fueron los Tonton Macoutes. Nombre popular con el que se reconocieron a las milicias populares que Duvalier creó en 1959 y que rebautizó en 1962 como “voluntarios de la Seguridad Nacional” (29). Además de ser un cuerpo represor también fue hábilmente empleado para neutralizar al Ejército. En cuyo seno fueron promocionados los oficiales duvalieristas y marginados los oficiales disidentes, entre otras modificaciones. El dictador aplicó astutas estrategias para asegurarse el apoyo de las Fuerzas Armadas o al menos su neutralización respecto al régimen. (30)

Una vez sentadas las bases de apoyo del régimen, la fidelidad al mismo se alimentó mediante una extensa red clientelar que atravesaba verticalmente a toda la población, civil, militar, funcionarios o campesinos. Los apoyos más importantes no siempre fueron los más caros al régimen. Los pequeños favores, recompensas o puestos en los cargos más bajos de la administración, e incluso la posibilidad de conseguirlos algún día, garantizaban la adhesión. Se creó así un grupo de solidaridad que sin altos costes fueron seguidores de Duvalier (31). Como en toda relación clientelar, el vínculo entre el poder y sus seguidores estuvo basado en la reciprocidad. Aunque la naturaleza recíproca de este vínculo no fuera igualitaria, logro establecer ciertos límites a un poder dictatorial y antiestatal que, por serlo, era un orden injusto, violento y

(28) MANIGAT, LESLIE. “De un Duvalier a otro: Itinerario e un fascismo de subdesarrollo”. Monte Ávila. Caracas 1972. pp. 47-59.

(29) Ibid., pp. 43-46. Los Tontons Macoutes frente a lo que comúnmente se ha creído no fueron un cuerpo monolítico ni todos procedían de los niveles inferiores de la sociedad. En su organización interna se distinguía un grupo de acción, dedicados a las actuaciones de terrorismo y asesinatos; también había cuadros de profesiones liberales y clases medias ávidos de ascenso social, son los cuadros medios desde donde pueden saltar al ejército. Y por último, un tercer estrato, la milicia popular procedentes de las clases populares, cuyo uniforme, le proporcionaba prestigio social y autoridad.

(30) LAGUERRE, MICHAEL. “*The military and Society in Haiti*”. Houndmills Yetc. Macmillan 1993. pp. 105-122.

(31) TROUILLOT, MICHEL-ROLPH. “*State Against Nations*”. Monthly Review Press. New York 1990. pp. 155-156.

sin la más mínima garantía y certidumbre legal. En efecto, todos los actores, incluido el poder presidencial, eran conscientes que si éste no respetaba los términos acordados en la relación que le vinculaba corría el riesgo de perder sus apoyos.

El final de los apoyos de la dictadura hereditaria con “Baby Doc”.

Muy posiblemente la caída de Jean-Claude Duvalier responda en parte a la modificación de los términos en que su padre había establecido esta relación de reciprocidad con sus clientelas. Los cambios en la gestión presidencial introducidos por Jean Claude le hicieron caer en contradicciones que le costaron importantes apoyos. Mientras la continuidad del poder duvalierista, con la sucesión del hijo, no fue cuestionada ni resistida, a pesar de las expectativas de la oposición en el exilio, el motivo de malestar comenzó con algunas de las decisiones del nuevo Presidente. Aunque había heredado una aparatosa burocracia enraizada en la clase media negra y en campesinos acomodados, él comenzó lentamente a moverse hacia otros sectores de apoyo, preferentemente mulatos tecnócratas y hombres de negocios procedentes del mundo de su esposa, una mujer mulata perteneciente a una de las familias más ricas de Haití (32). Así mismo prescindió de hombres de confianza de su padre, sustituyendo por ejemplo al jefe de los Macoutes. Con ello minó el apoyo del tradicional duvalierismo anti-mulato.

Pero no solo había divisiones en el lado oficialista sino que la estrecha apertura democrática a la que se comprometió el Presidente permitió denuncias hasta el momento difíciles de imaginar. En 1985, el reducido espacio permitido por el régimen para la formación de partidos políticos y la crítica al gobierno favoreció una movilización popular, en la que la acción de resistencia de la Iglesia fue decisiva (33). Ante el inicio de esta reacción popular el Presidente demostró una permanente vacilación entre la conciliación y la represión demostrando una debilidad que antes jamás había sido vista. Desde octubre de 1985, la crisis económica y la presión extranjera fueron otros factores que, sumados al agotamiento del régimen, originaron una crisis que acabó desembocando en la caída de Jean-Claude Duvalier, el 7 de febrero (34).

(32) JEAN CLAUDE se casó en 1980 con MICHÈLE BENNET, una rica mulata, cuyo padre era un comerciante dedicado al negocio de coches, aunque fue persistentemente acusado de traficante de drogas.

(33) Sobre la movilización popular y las protestas populares en contra de la dictadura PIERRE CHARLES, GERARD. *“Haití: nuevas etapas de la resistencia popular”*. Revista Nueva Sociedad. N° 73 julio-agosto 1984, pp. 18-21.

(34) En relación a los acontecimientos acaecidos en este período FERGUSON. Op.cit. pp. 91-118.

De la transición a la segunda presidencia de Jean Bertrand Aristide 1986-2004.

La caída de Duvalier abre una oportunidad de transformación a la sociedad haitiana que se vivió con gran optimismo. El gran reto para Haití era no sólo superar veintinueve años de dictadura sino además establecer las estructuras de un poder estatal. La incapacidad para llevar a cabo esta compleja tarea explica en buena parte la sucesión de los acontecimientos y las características que presenta la transición. El conflicto permanente en que se ven envueltos civiles, militares, partidos políticos, asociaciones populares, demócratas y duvalieristas, desde 1986 hasta la actualidad, pone de manifiesto la inexistencia de dicho poder estatal, así como de algún poder que al menos fuera reconocido como preeminente, única garantía posible para lograr cierta estabilidad.

A ello se suman las consecuencias derivadas de un orden político donde no existe un poder estatal. Por fuerza en dicho orden tampoco puede haber una cultura cívica basada en el respeto a la legalidad de dicha organización estatal. Como consecuencia la ley se modifica e incumple por toda la sociedad en su conjunto, tanto por gobernantes como por gobernados. Este es un aspecto fundamental para entender el comportamiento de todos los actores implicados en esta etapa. En efecto se ejercen libertades y derechos contemplados en la Constitución. El derecho de asociación hace posible la formación de partidos que compiten en elecciones. Se crean asociaciones independientes o activos movimientos sociales. Sin embargo, los actores citados no respetan las reglas del juego que regulan la competencia entre las fuerzas políticas ni aceptan los principios básicos de cooperación y competición, en la formación de gobiernos y políticas. Cada partido se considera el único capaz de gobernar el país y además hará todo lo posible para perpetuarse en el poder. Cada grupo actúa solo de acuerdo a sus intereses, sin tomar en consideración la repercusión que tendrá en términos más amplios. Cualquiera que sea la norma (constitucional u ordinaria) en la oportunidad que haya intentaran burlarla (35).

Todos estos problemas y comportamientos son los que generan una inestabilidad y violencia permanente en los acontecimientos que se suceden entre 1986 y 2004. Período en el que es posible diferenciar varias etapas.

(35) SCHMITTER, PHILIPPE. “*Transitology: The Science or The Art of Democratization?*” en Joseph S. Tulchin and Bernice Romero (eds.). *The Consolidation of Democracy in Latin America*. Lynne Rienner Publishers. London 1995. p. 16.

Los erráticos pasos hacia la transición democrática 1986-1989.

Ante el vacío de poder provocado por la caída de Jean Claude Duvalier se abre un período de inestabilidad permanente. Se establece el Consejo Nacional de Gobierno (CNG), presidido por el General Henri Namphy, un órgano colegiado bajo el cual se aprueba la nueva Constitución y tienen lugar las dramáticas elecciones de 1987, dominadas por la violencia y la represión. La repetición de las elecciones hará posible la presidencia de Leslie Manigat, en enero de 1988, que sin embargo no contó con el reconocimiento de la oposición. No obstante el 20 de junio el golpe de Estado del General Namphy acaba esta presidencia. Aunque dicho golpe no le garantiza su permanencia en el poder ya que a su vez es derrocado por Prosper Avril en septiembre del mismo año. El 13 de marzo de 1990 Avril se ve forzado a abandonar el poder y se nombra a Ertha Pascal-Trouillot como presidenta provisoria para celebrar elecciones.

El Consejo Nacional de Gobierno y la presidencia del Teniente General Henri Namphy.

El vacío de poder dejado por Jean-Claude Duvalier es ocupado de inmediato por una junta cívico-militar autodenominada Consejo Nacional de Gobierno (CNG), presidida por el Teniente General Henri Namphy, ex Jefe de Personal del Ejército durante el gobierno de Jean-Claude Duvalier. El CNG asumió el poder el 7 de febrero de 1986 y quiso demostrar su firme empeño por democratizar el país (36). El paso más inmediato era elegir a los miembros de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución. Posteriormente, se celebrarían elecciones presidenciales por sufragio universal. El problema era el vacío legal existente. El CNG se había creado para organizar las elecciones, sin embargo unilateralmente decidió prolongar su mandato hasta dos años.

Las elecciones a la Asamblea Constituyente se celebraron el 19 de octubre de 1986. La participación electoral, del 9,2%, demuestra la falta de confianza en esta Asamblea y su labor. Muy diferente al 45.5% de los votantes que acudieron al referéndum celebrado, en marzo de 1987, para aprobar la nueva Constitución, pues en el proceso de elaboración fue adquiriendo apoyo popular. La organización de las elecciones de las elecciones legislativas y presidenciales, corrió a cargo del Consejo Electoral Provisional (CEP) constituido el 21 de mayo de 1987.

(36) Según el CNG, en sólo unos días, había puesto en libertad a todos los prisioneros políticos; restablecido la libertad de prensa absoluta; disuelto y desarmado a los VSN; incautado y nacionalizado los bienes, muebles y propiedades del ex Presidente Jean-Claude Duvalier; restablecido la bandera azul y roja de Haití (durante la dinastía Duvalier ésta había sido cambiada por azul y negro). De hecho, el CNG hizo la mayoría de cuanto aducía haber hecho, con la excepción de desarmar a los Macoutes.

Desde su creación debió de defender su independencia frente al poder ejecutivo. Sus miembros rechazaron un decreto del Consejo que autorizaba su constitución pues entendían que su creación se debía a una disposición constitucional y no a una decisión del Ejecutivo.

El Consejo Electoral y la movilización popular contra el CNG.

El enfrentamiento adquirió mayor dimensión cuando el Ejecutivo no promulgó la ley electoral elaborada por el CEP. Además el CNG, el 19 de mayo, publicó su propia Ley Electoral y anunció que las elecciones municipales se celebrarían el 23 de agosto, actos que socavaban la independencia del CEP. Las movilizaciones extendidas por todo el país entre mayo y junio, por otros motivos, acabaron adoptando como su principal reivindicación la defensa del CEP y su independencia frente al CNG, hasta acabar exigiendo su fin (37). La presión popular obligó al CNG a anular su decreto. Sin embargo, las posiciones se radicalizaron y esta decisión no detuvo las movilizaciones que fueron brutalmente reprimidas. La dinámica de protesta y represión establecida entró en una espiral. La masacre en el pueblo de Jean Rabel, provocó nuevas protestas y huelgas. La falta de disposición para dialogar entre las partes enfrentadas llegó a situaciones de violencia, en las que los manifestantes incluso aplicaron la justicia popular (38).

Finalmente, aunque el 14 de julio, el CEP publicó su Ley Electoral, aceptada por el gobierno, el proceso no se resolvió pacíficamente. Desde mediados de octubre, grupos paramilitares operaban con total impunidad. Entre octubre y noviembre se inició un nuevo motivo de enfrentamiento entre el CEP y el CNG en relación a la calificación de los candidatos. Esta era una competencia del CEP, de la que pretendió hacer uso el CNG calificando como tales a personas asociadas con la dictadura, a pesar de la disposición constitucional que prohibía el acceso de antiguos duvalierista a cualquier cargo en el plazo de 10 años. El CEP desautorizó a doce miembros de la administración Duvalier. La reacción se expresó mediante incendios y destrozos de las casas y negocios de algunos miembros de este organismo, así como de las propiedades de algunos candidatos. Para combatir entonces esta situación, el mismo CEP públicamente apeló a la colaboración de los grupos de vigilancia (39) para asegurar el proceso electoral. Dicha colaboración desembocó en linchamientos a varias personas por estos grupos.

(37) Acerca de la organización y de la movilización popular en este tiempo, PIERRE CHARLES, GERARD. *“La revolución democrática en Haití”*, Revista Nueva Sociedad. N° 94 marzo-abril 1998. pp. 22-33.

(38) BRICEÑO, Op. cit. pp. 99-100

(39) El CEP estableció las "Brigadas de Vigilancia", como un medio de mantener el orden, prevenir la coerción de los votantes y ayudarlos a encontrar sus centros electorales, actuando siempre de manera neutral. A pesar de la naturaleza de estas brigadas no era difícil imaginar que su actuación podía ser violenta en aquel contexto.

La población organizada en grupos vecinales tomó por su cuenta la función de protección ciudadana.

La situación alcanzada era producto de la inexistencia de un poder estatal que mediante la imposición de la ley y el orden encauzara este proceso. Lejos de ello, las instituciones, supuestamente estatales, fueron quienes, en parte, dieron origen a un enfrentamiento que acabó en violencia. Unos actos de violencia cuyos protagonistas demostraron carecer de cultura cívica y de respeto al cumplimiento de la ley, incluyendo a los miembros de la CNG y a los del CEP. Ante los paramilitares y las patrullas de vigilancia, a las que la policía y las FF.AA dejaban actuar, el CEP, por su parte, animó a las patrullas populares a combatir las agresiones contra el proceso electoral. Estas iniciativas violentas particulares son otra consecuencia derivada de la inexistencia de un poder estatal capaz de monopolizar el uso de la fuerza. Así mismo, la falta de asistencia de una justicia estatal, por definición general y universal para todo el territorio y todos los ciudadanos, explica igualmente los episodios de justicia popular que se dieron en esta etapa, si bien no era ninguna novedad.

El conflicto entre las dos instituciones las llevó a utilizar las elecciones para boicotarse mutuamente, cada una en la medida de sus posibilidades y fuerzas. El mayor problema es que con esta estrategia también boicotaron el mismo proceso de transición democrático. Tras la jornada electoral, el CEP se vio forzado a suspender las elecciones ante la falta de medios que debía haberle proporcionado el CNG y fundamentalmente por la brutal represión utilizada contra los electores. En diferentes colegios electorales fueron asesinados los ciudadanos que acudieron a votar. Este aplazamiento fue aprovechado por el Ejecutivo para disolver el CEP y por iniciativa propia organizar otra elección. (40)

Las nuevas elecciones 17 de enero y la sucesión de dos golpes de estado, una renuncia a la presidencia y una presidencia provisional entre junio de 1987 y diciembre de 1990.

Cuatro candidatos presidenciales se negaron a participar en estas elecciones al considerar ilegales las medidas del CNG, como la disolución del CEP y la organización de los comicios

(40) Sobre estas elecciones, “La masacre ocurrida el día de las elecciones del 29 de noviembre y la disolución del CEP”. Capítulo II, Informe OEA. Op. cit.

pues era una competencia que no le correspondía. Leslie Manigat (41), que no renunció a su candidatura, ganó las elecciones aunque la oposición pretendió deslegitimar el resultado denunciando que únicamente había votado el 8 % de los electores.

El intento de Manigat de debilitar las FF.AA favoreciendo la división entre sus jefes le costó su derrocamiento por el propio General Namphy, el 20 de junio de 1988 (42). Sin embargo, el 17 de septiembre la llamada rebelión de los sargentos derrocó a éste y fue nombrado nuevo Jefe de Estado, Prosper Avril. El objetivo era restaurar la Constitución de 1987, detener el período de violencia sufrido y retomar el proceso de democratización. Los resultados de las iniciativas anunciadas fueron decepcionantes. Además ninguna de las investigaciones sobre asesinatos de líderes políticos o de votantes del 29 de noviembre de 1987 o de la matanza de San Juan Bosco, el 11 de noviembre de 1998 (43), no obtuvieron ningún resultado. Paralelamente, el descontento social se hacía cada vez más patente ante la represión de líderes sindicales y de dirigentes políticos y el nivel de violencia alcanzado por los grupos armados. La presión y las manifestaciones populares obligaron al General Avril a renunciar en marzo.

En efecto, los episodios de violencia continuaron repitiéndose por bandas paramilitares, apoyadas por el gobierno o por la oposición. Una situación de caos que alimentaba más desorden, ya que los ciudadanos aplicaban su propia justicia. A la caída de Namphy, los soldados de algunos cuarteles se rebelaron contra sus comandantes y los expusieron al expolio público: “como los haitianos saben que sus tribunales no administraran justicia debidamente, el pueblo la aplica con sus propias manos cuando se le presenta la ocasión” (44). Cuando Avril dejó el poder también hubo episodios violentos y muertes de personas asociadas al militar.

El nuevo Gobierno Provisional de Pascla-Troillot y la elección de J.B. Aristide (diciembre de 1990)

El 13 de marzo asumió la presidencia la señora Ertha Pascal-Troillot, Presidenta de la Corte Suprema, tal y como estipulaba la Constitución cuando la presidencia quedaba vacante. Junto a ella trabajaría un Consejo de Estado, integrado por 19 miembros, representantes de las

(41) Hubo siete candidatos que decidieron participar en las elecciones.

(42) Para este episodio, del cual fue protagonista además de Manigat, el Cnel. Paul Claude y el Gral. Namphy, LAGUERRE. Op. cit. pp. 162-193.

(43) Para este episodio “El golpe dentro del golpe, del 17 de septiembre de 1988”. Capítulo II. Informe OEA. Op. Cit.

(44) BRICEÑO Op. cit. pp. 99-177.

principales fuerzas políticas y sociales de Haití para organizar las elecciones. La complicada relación entre la Presidenta y el Consejo enfrascados en discutir sobre sus respectivas competencias, llegó en parte a paralizar las gestiones para su principal cometido. Algo difícil de creer en una situación en la que se temía por el estallido de una situación de violencia generalizada en el país, aunque si aclara bastante sobre las prioridades de la clase política. Las matanzas en el medio rural no pararon y la actividad de los escuadrones de la muerte se incremento. Una situación que generaba aún más violencia ya que la población ante la sensación de desprotección por las fuerzas de seguridad del Estado también se armaban. Además volvió a Haití el 7 de julio Roger Lafontant, Jefe de los Tontons Macoutes, mano derecha de Baby Doc. Tuvo lugar una huelga general por su vuelta, exigiendo su arresto, sin embargo la policía militar se negó a ejecutar la orden y él mismo se declaró candidato presidencial, a la cabeza del partido URN. Finalmente fue descalificado como candidato por razones técnicas.

A pesar de las dificultades, la campaña electoral y las elecciones, en términos generales, se desarrollaron de forma pacífica. Considerando los anteriores comicios, así como la violencia imperante en ese momento, parecía imposible que se desarrollase una campaña electoral y unas elecciones sin coacciones y amenazas. Tampoco ningún partido cuestionó los resultados. Esta situación fue posible gracias al pacto alcanzado, entre todas las fuerzas políticas y las Fuerzas Armadas, para impedir por todas las partes la quiebra del orden constitucional (45).

La imposibilidad de encauzar la transición democrática, 1990-2004.

Pese a las dificultades que atravesó el país hubo importantes aspectos positivos. El más importante fue la celebración de las primeras elecciones libres y pacíficas, desde 1986. Sin embargo, desde el golpe militar que acabó con la presidencia de Aristide, las expectativas se vinieron abajo. En cualquier caso sería parcial limitar la responsabilidad de la crisis política únicamente a los militares. Estos no fueron los únicos que obstaculizaron la transición, el resto de los partidos, después del golpe de estado, se resistieron al retorno de Aristide. No obstante con la vuelta de éste, la elección de Preval y la nueva elección de aquel tampoco se logró encauzar la transición democrática. Se vuelve a poner de manifiesto que los actores implicados sin excepción

(45) Este acuerdo esta confirmado mediante el testimonio de Rene Theodore, dirigente del Movimiento de Renovación Nacional, candidato presidencial el 16 de diciembre de 1990. El candidato expresa la celebración de un pacto entre partidos y militares para que estos respeten la Constitución y el orden constitucional, esto hizo posible la expulsión de Avril y la celebración de las elecciones. Este testimonio plasmada en una entrevista esta reproducida en SELLA, ORLANDO E., “*La caída de Aristide. Crónica de una frustración popular*”. Universidad Nacional. Heredia 1996. pp. 366.

en este proceso, en el caso que nos ocupa Aristide, Preval y la oposición, compartían una cultura política excluyente mediante la cual no cabía la negociación y la cooperación. La política se desarrolló empleando el bloqueo, el abuso de poder o la infracción a la legalidad. En las dos oportunidades que tuvo Aristide de gobernar, invariablemente, lo hizo de forma excluyente y sin respeto a la legalidad. De esta forma, todas las esperanzas y el optimismo que despertó su victoria pronto se desvaneció.

En este período, las elecciones que dieron la victoria mayoritaria a J. B. Aristide, a finales de 1990, inauguró una presidencia que únicamente se prolongó hasta septiembre de 1991 debido a un nuevo golpe de Estado. Después de las negociaciones que se establecieron entre el presidente Aristide y la oposición, con la mediación de la comunidad internacional, una misión internacional impuso la vuelta de Aristide el 15 de octubre de 1994. En diciembre del mismo año, se celebraron las elecciones al agotarse el período presidencial, limitado por cinco años, según la Constitución. Como resultado de los comicios René Preval inició una presidencia entre febrero de 1996 y diciembre de 2000. Aunque sin ser exclusivo de este período, esta presidencia estuvo dominada por las acusaciones de fraude electoral, por el bloqueo institucional, la división política y la violencia estructural. La sombra de Bertrand Aristide fue permanente así como la movilización de su partido Fanmi Lavalas. En febrero de 2001 se inicia la segunda presidencia de J. B. Aristide. Mientras Aristide empleó el fraude electoral para ganar, la denuncia de dicho fraude fue utilizado por la oposición para no reconocer su elección. Desde un principio se dio una situación de bloqueo entre el poder ejecutivo y el legislativo. La violencia ejercida por las bandas armadas continuó siendo una constante. Finalmente ante la presión popular y un levantamiento armado Aristide abandonó el poder.

El Presidente sin presidencia (1990-1995). Los escasos meses de gestión y el golpe de Estado.

Los principales candidatos en la campaña electoral fueron Banzín, candidato que fue asociado a las clases adineradas, el duvalierismo y el Ejército. J.B. Aristide era considerado el representante del pueblo. Sus apoyos se aglutinaron en el Frente Nacional del Cambio y la Democracia (FNDC) y en Lavalas. Después de la jornada electoral, el 19 de diciembre de 1990, todos los observadores presentes coincidieron en señalar que las elecciones habían sido libres. El ganador fue Aristide que logró acumular el 76 % de los votos con una participación del 75 % del electorado. Una participación inédita en el país.

Esta victoria se explica en buena parte por el liderazgo ejercido por el ganador y la incapacidad de sus contrincantes de lograr apoyo popular. Cuando Aristide presentó su candidatura ya era el “pastor de todos los pobres”. Aunque no ya en condición de cura salesiano pues debido a su actividad política la Iglesia decidió su expulsión. Antes de ingresar en la política arrastraba gran popularidad, su predica se basaba en la teología de la liberación, lo que le costó acusaciones de marxista que él siempre negó. Su antimacutismo y su antiamericanismo eran fundamentales para arrastrar un apoyo popular y restarle votos a su principal rival (46). Dentro de su discurso también exigió el reparto de las riquezas para los pobres. Discurso que tuvieron particular eco al dirigirse a las masas populares. Un medio más de identificarse con el pueblo, con el que se comunicaba en la lengua que ellos hablaban e incluso con la forma en que lo hacían al emplear en muchas ocasiones los refranes populares. En sus discursos también recurrió a un misticismo visionario que acabó siendo característico en la mayoría de sus mensajes. Aristide se consideraba el único capaz de interpretar y representar la voluntad popular, una misión que había sido santificada por Dios.

La relación directa con el pueblo formó parte de su liderazgo, tanto antes como después de acceder a la presidencia. De hecho al Palacio presidencial asistían diariamente numerosos grupos y personas procedentes de todo el país para presentar sus solicitudes y problemas al Presidente. Todos los recursos que le proporcionó su carisma personal fueron siempre orientados a transmitirle al pueblo que él era como ellos y que el gobierno real era el del pueblo. La ceremonia de la transmisión del poder presidencial estuvo llena de actos simbólicos. Una campesina, con un turbante blanco, fue quien le impuso la banda presidencial y en la misma ceremonia recibió como regalo de los niños del orfanato, que había fundado años atrás, una modesta silla presidencial. Así mismo, el desayuno del primer día de la nueva presidencia se celebró con niños de la calle, “anunciando que si había para los ricos, debía haber para los pobres también”. Sin embargo esta relación directa con los gobernados además del populismo que tuviera implícito, no dejó de ser contradictoria con el carácter representativo de la democracia y de sus instituciones que el Presidente ignoraba al fomentar dicha relación (47). El contenido de su mensaje y la forma en que lo transmitió le proporcionaron el apoyo

(46) MOÏSE CLAUDE; OLLIVIER, ÉMILE. “Repenser Haiti: grandeur et miseres d'un mouvement democratique”. CIDIHCA. Montreal 1991. pp. 146-153.

(47) En su tensa y complicada relación con el legislativo, Aristide argumentó en diferentes ocasiones que el éste no podía fiscalizar su actuación y decisiones, pues esta labor le correspondía sólo al pueblo que le había elegido. Un planteamiento que no podía más que socavar la fundamentación de los principios del sistema democrático que se pretendía establecer.

incondicional de sus seguidores durante toda la década. A ello contribuyó también la falta de alternativas, pues el resto de los partidos era pequeñas formaciones sin ningún arrastre popular.

El movimiento Lavalas se conoce cuando Aristide se presenta a las elecciones. No tenía identificación política alguna, solo se identifica por el lema “Justicia, Transparencia y Participación”. Carecía de estructura interna y tenía una composición muy heterogénea, religiosos, intelectuales, universitarios, izquierda, ex duvalieristas, miembros de comunidades populares... El vínculo fundamental de unión era su líder en torno al cual giraba toda la organización.

Desde el inicio de la presidencia, Aristide enfrentó graves amenazas, incluso antes de realizarse la ceremonia oficial de nombramiento. Un mes antes hubo un intento de golpe de Estado. Roger Lafontant, miembro del gobierno de J. Cl. Duvalier, apoyado por un sector del ejército, se autoproclamó Presidente de la nación. Sin embargo una virulenta reacción popular impidió el avance de esta iniciativa. La gente salió a la calle a defender la elección realizada y armados rudimentariamente aplicaron su justicia no solo a los Tonton Macoutes que apoyaron al golpista, sino también a aquellos sospechosos de haber tenido alguna relación con éste. Seguidamente, las masas cristianas se dirigieron a la Catedral y la destruyeron, así como la Conferencia Episcopal y el Arzobispado. El ataque contra la Iglesia fue la respuesta a la homilía que Monseñor Fracois Wolf Ligondé realizó el 1 de enero de 1991, donde desaprobó al nuevo gobierno acusándole de intolerancia y provocación. Las destrucciones de las propiedades de los golpistas y de la Iglesia no fueron golpes de ira desatados, sino que respondieron a “castigos” contemplados por la justicia popular. En este caso se aplicó el *decoupage*. Por lo que respecta a las víctimas mortales, buena parte de ellos fueron ajusticiado mediante el *peré lebrum* (48). A pesar de que Aristide hubiera podido detener estos hechos mediante un llamamiento a sus seguidores no fue hasta dos días más tarde, cuando éste condenó la intentona golpista, pero no criticó explícita ni rotundamente la violencia popular. No obstante animó a que en caso de improvisar barricadas, se hicieran ordenadamente (49).

(48) Sobre estos episodios SELLA, Op. cit. pp. 110-114 y 118-120. El *decourage* es un sistema de justicia popular que significa extirpar de raíz, desarraigar, eliminar. En la práctica supone la destrucción total de los bienes materiales del adversario mediante la utilización de métodos violentos y fuego. En esta ocasión fueron “decuchadas” 50 propiedades y los bienes de la Iglesia en Puerto Príncipe. *Pere Lebrum* significa la eliminación física del candidato mediante la colocación de un caucho o cubierta en su cabeza que ajusta en sus hombros ambos brazos, para luego rociarlo con combustible e incendiarlo.

(49) Gran parte de este discurso se encuentra publicado en *Ibid.* pp. 114-117.

Quizás fuera ingenuidad y, sin ninguna duda, falta de experiencia política lo que indujo a Aristide a aplicar sistemáticamente la confrontación con todos los actores sociales y políticos. Su confianza en el apoyo popular le pudo convencer que era suficiente para tomar decisiones complicadas sin contar con los directamente afectados. La primera decisión fue tomada el mismo día de la toma de posesión, el 7 de febrero de 1991, cuando declaró, delante de toda la comunidad nacional e internacional, que el Estado Mayor sería renovado sin previo aviso a los afectados. Después de este comienzo, el malestar creció ante la pretensión de Aristide de ignorar la cadena de mando y dar órdenes directamente o favorecer determinadas promociones. Por otra parte se acusó al gobierno de crear una fuerza paramilitar para neutralizar a las FF.AA.

Las relaciones con el Parlamento comenzaron a tensarse cuando tuvo que imponer a su primer ministro frente a la resistencia de la Cámara Legislativa. Ciertamente tenía derecho a proponer un gobierno integrado por su gente, pero habría sido más acertado crear un gobierno integrador, incluyendo a algún miembro de la oposición o, al menos, a algunos de los partidos de la coalición que le apoyo. Esta manera unilateral y excluyente de actuar por parte del gobierno favoreció una tensión política que desembocó en divisiones entre la coalición electoral, el Frente Nacional para el Cambio y Democracia (FNCD) y el Movimiento "Lavalas" (50). A la larga esta postura debilitó al Presidente, ya que en el Congreso el FNCD acabó por negarle su apoyo.

A la elite le preocupaba las amenazas de sus discursos, donde el Presidente denunciaba la injusta distribución de la riqueza en el país, pues a su modo de ver podía inducir al odio de clases. Este radicalismo, sin embargo, no trascendió más allá del discurso, la política económica del gobierno no fue nunca una amenaza para las fortunas del país. Su proyecto económico tenía como referencia el modelo de crecimiento con equidad que emerge en el Caribe en las décadas de los 70 y 80, siguiendo las pautas de la socialdemocracia, como alternativa al capitalismo de libre mercado. Sin embargo los compromisos con Estados Unidos y los organismos internacionales le obligaron a renunciar a este modelo de desarrollo y a asumir una política de reestructuración que él mismo había criticado (51). No obstante, nunca la aplicó de manera sistemática y con regularidad debido a la impopularidad de las medidas, como evidenciaron las manifestaciones, en aquellos meses, en contra de la política económica del gobierno.

(50) ETZER, CHARLES. « *Le Pouvoir Politique en Haïti de 1957 a Nos Jours*. Karthala. Paris 1994. p. 403.

(51) DUPUY, ALEX, "*Haiti in the New World Order. The limits of the Democratic Revolution*". Westview Press 1997. Respecto a las exigencias de los organismos internacionales véase DENLINCÉ, KERN, "*Les Forces Politiques en Haïti*". Karthala. Paris 1993.

Hubo otras medidas que tampoco estuvieron exentas de polémica como la reforma en el ámbito local. Para evitar los abusos de las autoridades locales, se suprimieron los jefes rurales de sección. Sin embargo esta medida creó un vacío de autoridad que aumentó la incertidumbre y la inseguridad (52), debido a la falta de recursos humanos y materiales para sustituir una administración local por otra. Las críticas no se limitaron a estas cuestiones, también esta decisión se contabilizó como una infracción legal más del gobierno, ya que esta forma de administración estaba estipulada por una ley vigente que Aristide ignoró. Esta fue una de las numerosas acusaciones formuladas contra el autoritarismo del Presidente. La oposición denunció violaciones a la Constitución, actos ilegales y de corrupción, así como violaciones de los derechos humanos realizados por el gobierno o colaboradores del mismo. (53)

La forma de gobernar en estos meses pone de manifiesto que dentro del orden político haitiano la violación del orden legal era una cuestión estructural. El malestar con el gobierno no era tanto por no respetar la legalidad, sino por no emplearlo como una herramienta de negociación con los actores sociales. Como se ha podido comprobar en un orden político no estatal la modificación de las leyes o su incumplimiento podía proporcionar al menos paz social y cierta estabilidad pues se empleaba para negociar con diferentes sectores de la sociedad, de acuerdo a sus posiciones o intereses particulares (54). Bajo esta concepción política dominante, el motivo de la frontal oposición a Aristide era que las infracciones a la legislación vigente únicamente se habían empleado para gobernar de forma unilateral y excluyente sin considerar los intereses y demandas de diferentes actores sociales. En este clima de crispación, el 27 de septiembre, en vísperas del golpe de Estado, el Presidente pronunció un discurso amenazante contra los grupos dominantes y animó al pueblo a la acción violenta (55). Quizás fuera una estrategia para neutralizar el golpe de Estado. En cualquier caso todo indica que esta radicalidad terminó de convencer a aquellos ocupados en conspirar contra él, de la necesidad de llevar a cabo su plan (56). En realidad no era la primera vez que Aristide proponía la violencia como modo de actuación, si se tiene en cuenta algunas de sus publicaciones (57).

(52) Sobre estas críticas véase la opinión de un líder de la izquierda, entrevista a René Theodore en SELLA, Op. cit. pp. 365-371.

(53) Estas acusaciones están reproducidas en Ibid, pp. 159-171.

(54) ESCALANTE, Op. cit. pp. 8-9.

(55) Este discurso se encuentra reproducido en SELLA, Op.cit. pp. 206-208.

(56) MOÏSE ; OLLIVIER, Op. cit. pp. 157-160

(57) En febrero de 1986, Aristide publicó un libro titulado “Los 100 Versículos del Dechouage” una verdadera apología de la violencia.

El golpe de Estado del 29 de septiembre de 1991 y las negociaciones para la vuelta de Aristide, 1991-1995.

El 29 de septiembre de 1991, después del derrocamiento del Presidente, se constituyó una Junta Militar, dirigida por el General Raoul Cédras, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que casi de inmediato entregó el poder al Parlamento. En esta situación de vacío de poder cabían dos opciones. Según la Constitución era posible aplicar el artículo 148, mediante el cual se podría nombrar, por el Legislativo, un nuevo gobierno hasta el retorno del presidente o bien, como planteó la Cámara de los Diputados y el Senado, el artículo 149, que ante la ausencia del presidente se nombraría un presidente provisorio para convocar elecciones. La OEA que, desde el principio de la crisis se implicó para encontrar una solución, orientó todo su esfuerzo en proponer la aplicación del art. 148, pues con ello era posible retornar a la situación de legalidad constitucional, quebrada por el golpe militar y devolver la presidencia a Aristide. Sin embargo, a pesar de las penalizaciones económicas que se aplicaría contra Haití, el Congreso y el Senado decidieron establecer un gobierno provisorio, cuyo objetivo sería organizar unas elecciones. Esta posición de los poderes estatales haitianos quedó expresada el 8 de mayo de 1992, en el Acuerdo Tripartito de la Villa d'Accueil, donde se desconoció a Aristide como presidente constitucional y se decidió la creación de un "gobierno de consenso". No obstante el Congreso a pesar de adoptar una alternativa contraria a la planteada por la OEA y la ONU, implicada en la crisis desde 1992, puso todo su empeño en no cerrar las negociaciones, ya que el país fue sometido a un embargo dictado por una resolución de Naciones Unidas. Con estas posiciones continuó un largo y complicado período de conversaciones que, a pesar de prolongarse varios años, permitieron finalmente la vuelta de Aristide.

La presión del embargo acabó forzando a las autoridades haitianas a alcanzar determinados acuerdos, como la firma del Acuerdo de Governors Island, en Nueva York, el 3 de julio de 1993. Las partes, Jean-Bertrand Aristide y el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas haitianas, General Raoul Cédras, aceptaron la reinstalación del presidente Aristide en sus legítimas funciones, creando así las condiciones para su retorno el 30 de octubre de 1993. Posteriormente este acuerdo fue firmado por todos los partidos haitianos. Entre las condiciones del mismo estaba formar un nuevo gobierno, cuyo primer ministro sería propuesto por J. B. Aristide. El Parlamento, cumpliendo con lo acordado, aceptó a Robert Malva. El 27 de agosto, casi simultáneamente, la ONU levantó el embargo. Sin embargo, a partir del mes de septiembre de 1993, los actos de violencia comenzaron a extenderse con el objetivo de obstaculizar la

instalación y el funcionamiento del nuevo gobierno. Ante esta situación y la negativa de Cedrás de abandonar el cargo el 15 de octubre según lo acordado, provocó que la ONU, el 16 de octubre, impusiera de nuevo el embargo.

La vuelta de Aristide y el fin de su presidencia.

A pesar de los compromisos, la falta de cooperación de las autoridades civiles y militares, haitianas obligó a postergar el retorno de Aristide. La violencia y el bloqueo institucional fueron en aumento desde principios de enero de 1994. Fracasados los intentos de negociación, el Consejo de Seguridad aprobó la formación de una fuerza multinacional para imponer la salida de los dirigentes militares, de conformidad con el Acuerdo de Governors Island, y el regreso del Presidente legítimamente electo. La Fuerza Multinacional, comandada por los Estados Unidos, llegó el 19 de septiembre de 1994 a Haití y permanecería en el país hasta la llegada de la MINUHA, la misión de la ONU. Finalmente, el 10 de octubre, el General Cédras anunció que abandonaría el país y el 15 de octubre se concretó el retorno del presidente Jean-Bertrand Aristide, tras un exilio de tres años.

A su vuelta le restaban escasos meses para acabar su período electoral, pues para retornar a Haití como presidente tuvo que ser reconocido como tal, aun en el exilio. El aspecto más destacable de esta última fase de su presidencia fue el decreto presidencial, de disolución de las Fuerzas Armadas en 1995, así como la creación de una nueva policía, con la cooperación de la misión de Naciones Unidas. Con la disolución de las Fuerzas Armadas se eliminaba una poderosa organización (58), que históricamente había intervenido en la política del país. Una dinámica que continuó a partir de 1986. Sin embargo, no es posible considerar las Fuerzas Armadas como el único obstáculo para alcanzar la democracia. La Historia haitiana generalmente no se ha desarrollado bajo la lucha entre militares golpistas y demócratas aspirantes a construir la democracia y el Estado de Derecho. El principal problema ha radicado en que ninguno de los actores implicados ha respetado la legalidad. Por ello, además de las iniciativas militares propias, los civiles también recurrieron a ellos para “eliminar” a sus rivales. Después del derrocamiento militar de Aristide, ni los partidos políticos, ni el Congreso, ni el Senado apoyaron el retorno del presidente legítimo de acuerdo a la legalidad constitucional. Muy al contrario se posicionaron abierta y frontalmente a su vuelta.

(58) LAGUERRE MICHELE, “*Business and Corruption: Framing the Haitian Military Question*” en L. BOBEA (ed.). *Soldados y Ciudadanos en el Caribe*. FLACSO. Santo Domingo 2002. pp. 259-284.

En los meses previos al fin de la presidencia de Aristide, sus seguidores promocionaron la idea de su reelección por los “tres años perdidos”, la presión internacional impidió que éste accediera a dicha propuesta (59). Una opción que además la Constitución impedía al prohibir la reelección sucesiva.

La presidencia de René Preval, 1996-2001. Bloqueo institucional, división política y violencia estructural.

El 7 de febrero de 1996 se inició la presidencia de René Preval. Su victoria electoral se debió al apoyo del propio Aristide cuya sombra estuvo presente detrás de la figura del nuevo presidente. Prácticamente todo el mandato presidencial estuvo dominado por una crisis política que acabó afectando a todas las instituciones estatales.

Las diferencias entre el presidente Preval y el primer ministro Rosny Smarth desembocó en la renuncia de éste en junio de 1997. Detrás de este conflicto, se encontraba realmente el enfrentamiento entre la Organización Política Lavalas (OPL), una coalición de partidos, y la Lafanmi (más adelante se identificaría como Organización Fanmi Lavalas (OFL)), formación surgida oficialmente poco antes de las elecciones de abril de 1997. Esta organización era el embrión del partido que Aristide había proyectado crear para asegurarse su victoria en las próximas elecciones presidenciales. La OPL había sido la organización utilizada por Lavalas para asegurarse en el Parlamento el suficiente apoyo así como la elección de Preval. Las primeras diferencias ya surgieron con el debate acerca de los “tres años perdidos”, en el cual la OPL no se mostró de acuerdo con dicha teoría. La creación de Lafanmi terminó por crear la ruptura total, hasta el punto de adoptar como estrategia, por parte de la OLP, el bloqueo de cualquier intento de formar un gobierno, después de la renuncia del Primer Ministro y otros miembros del gabinete (60). Por este motivo desde junio de 1997 a marzo de 1999 (61), el gobierno se compuso únicamente de algunos ministros y estuvo bajo la dirección del propio

(59) HECTOR, CARY. “*Democracia y gobernabilidad en Haití: desafíos y perspectivas (1986-2000)*”, en H. DILLA (ed.). Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe. Nueva Sociedad. Caracas 2002. p. 198.

(60) Como muestra de la división y posición crítica contra Lavalas, el partido dirigido por Charles Gérard Pierre decidió mantener las siglas pero cambió el nombre del partido por Organisation du Peuple en Lutte (OPL).

(61) En las elecciones de 1997, aún no estaba clara para los votantes la división entre estas formaciones y esto le permitió a OPL mantener la mayoría en el Congreso. No obstante, participó el 3 % de los electores, lo que evidencia la indiferencia de la ciudadanía respecto a la situación política.

Presidente. A esta crisis se sumó la disolución del Parlamento, en enero de 1999, basada en una interpretación interesada del Ejecutivo. En marzo, Preval recurrió a la oposición, y a través de un pacto, logró formar un gobierno que se limitaría fundamentalmente a convocar las elecciones y a atender las prioridades.

En este tiempo, con la colaboración del gobierno, Fanmi Lavalas pudo llevar a cabo su proyecto de controlar las instituciones estatales. En este sentido, los nuevos cuadros de la policía nacional (PNH) fueron reclutados de las filas de la organización, constituyéndose en una poderosa herramienta de poder (62). Otro utensilio de gran eficacia para el mismo proyecto fue la instrumentalización de las organizaciones populares (OP), que durante los primeros años de transición fueron un elemento imprescindible de movilización. A través de la permanente movilización y de su presencia en la calle pretendieron mantener viva la figura de Aristide y su adhesión al mismo para lograr los votos que le proporcionase la victoria en las próximas elecciones presidenciales (63)

La elección y la renuncia de Jean Bertrand Aristide. De febrero de 2001 a febrero de 2004.

La vuelta de Aristide en principio significaba la vuelta a la democracia. Sin embargo como ya había ocurrido el grupo que apoyaba a Aristide y el mismo líder habían adoptado formas de dominación y de actuación basadas en el nepotismo y el autoritarismo. De hecho mantuvieron la misma concepción exclusivista que en 1995, aunque la situación era diferente. Las expectativas e ilusiones habían desaparecido, la economía estaba arruinada y la pobreza había adquirido proporciones alarmantes. La situación de violencia y de inseguridad continuaba creciendo.

El gobierno no logró crear un clima de acuerdo. La oposición, agrupada en Convergencia Democrática (integrada por unos 15 partidos), y Lavalas utilizaron las elecciones para cruzarse permanentes acusaciones de corrupción y de manipulación. El año 2000 fue eminentemente electoral, se celebraron las elecciones legislativas y locales en mayo y junio. Además, en noviembre tendrían lugar las presidenciales. Antes y después de las elecciones se dieron episodios de violencia política, asesinatos e intimidaciones a personas relacionadas con la

(60) Respecto la formación de esta policía véase NEIL, RACHEL. “*La reforma policial en Haití: Un triunfo sobre la Historia*” en L. BOBEA, Op. cit. pp. 285-308.

(63) Sobre la formación y articulación de Fanmi Lavalas MANIGAT, SABINE. “*Haití 2000: Lavalas en el poder, Lavalas en cuestión*”. Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe. FLACSO año 4 2001. pp. 45-52.

oposición y al revés, creándose un ambiente generalizado de inseguridad. Las elecciones legislativas proporcionaron el control absoluto del Parlamento a Lavalas, aunque los resultados fueron denunciados por la oposición y los observadores internacionales, pues se había cometido fraude en el recuento de los votos. La cuestión es porqué se cometió dicho fraude, cuando la victoria estaba asegurada. Lavalas seguía siendo el partido con mayor fuerza, con gran diferencia respecto al resto de las otras fuerzas políticas. Ciertamente la popularidad no era la misma (64) y el entusiasmo tampoco, en estas elecciones participó el 5 % del electorado. El principal motivo para manipular los resultados fue que, aunque la victoria estaba asegurada, no había garantías de tener control total del Parlamento, cuando el objetivo era que Aristide gobernara sin oposición (65). El CD no reconoció los resultados y exigió la repetición de las elecciones, lo que implicaba retrasar las elecciones presidenciales. Además, según su criterio, la garantía de celebrar elecciones sin fraude suponía crear un consejo electoral imparcial y un gobierno provisional para organizar los comicios solicitados.

Las exigencias de esta coalición no prosperaron y se celebraron las elecciones presidenciales según el calendario previsto. En las elecciones de noviembre Aristide ganó con más del 90 % de los votos emitidos, si bien la participación electoral fue del 20 %. De nuevo se repitieron las denuncias de fraude. Convergencia Democrática (CD) no reconoció a Aristide. La coalición optó por mantener sus reivindicaciones respecto a las elecciones legislativas y nombrar a un gobierno provisorio paralelo encargado de todos sus objetivos. El mismo 7 de febrero de 2001, día en que Aristide asumía el poder, celebraron un acto simbólico en el que eligieron dicho gobierno. Los partidos de la coalición eran minoritarios y carecían de apoyo popular, de modo que utilizaron este acto como una herramienta propagandista suficientemente llamativa para que Estados Unidos lo siguiera con atención, en particular los republicanos que se oponían a la presidencia de Aristide. El CD, en algún momento, incluso, pensó que con el nuevo presidente, G. W. BUSH, podrían contar con una intervención armada que acabara con el gobierno Aristide. El talante de Aristide fue la negociación a toda costa, ya que no quería dar motivos a la comunidad internacional y en particular al gobierno norteamericano para justificar esa posible intervención (66). También, el mismo 7 de febrero se celebró el nombramiento del nuevo Presidente con gran demostración de apoyo popular. Éste ya había declarado su disposición a aceptar un gobierno incluyente, revisar las elecciones, incluso repetirlas con otro tribunal, pero

(64) En los Carnavales de 1997 se criticó al gobierno de Preval, que se daba por descontado que era el gobierno de Aristide.

(65) FATTON, ROBERT JR.. *“Haiti’s Predatory Republic. The Unending Transition to Democracy”*. Lynne Rienner. Oxford 2002. pp. 114-129.

(66) *Ibid.* pp. 141-148.

en absoluto renunciar a la presidencia. Pese a esta disposición a la negociación, de acuerdo con la política represora aplicada por el gobierno, no pareció muy sincera, por su parte la estrategia de bloqueo institucional adoptada por la oposición tampoco contribuyó a resolver la crisis.

La ciudadanía estaba cansada del espectáculo de crisis permanente y asistía impasible a esas luchas que consideraba ajenas. Luchas en las que la división ideológica era mínima. Se repetían acusaciones recíprocas sobre corrupción y ambiciones entre los líderes y miembros de los respectivos partidos. Estas acusaciones, en realidad, definen en buena parte las características de los partidos en Haití. Desde 1986 las numerosas formaciones que se han creado se han caracterizado por ser efímeras y oportunistas, no se han constituido como instituciones permanentes o ideológicas. Los vínculos a dichos partidos se han establecido mediante relaciones clientelares y se han construido alrededor de un líder. Sin excepción han carecido de una organización y de criterios de funcionamiento internos democráticos. Haití posee un índice de afiliación muy bajo y los numerosos partidos que han surgido en para cada elección carecen de arrastre popular, por la desconfianza de los ciudadanos en semejantes formaciones. La idea generalizada en la sociedad es que la lucha partidista se reduce a alcanzar el poder para enriquecerse a costa del patrimonio público y gobernar de manera excluyente con respecto a la oposición (67).

Además de la tensa situación política, Aristide iniciaba la presidencia en una situación de profunda crisis económica y de derrumbe social. En 2000 se alcanzaron los peores indicadores económicos desde 1986. La población se encontraba en una situación de emergencia, soportando las consecuencias de una alta inflación y la devaluación de la moneda. A pesar de todo, los recién llegados al poder hicieron uso de los fondos públicos como si fuera su patrimonio privado. La corrupción forzosamente continuó siendo consustancial al ejercicio de cualquier cargo público, al entenderse que el acceso a la administración era un medio no sólo de ascenso social, sino también de enriquecimiento. Una mentalidad que no era exclusiva del grupo gobernante sino de la clase política en general.

A fines de 2001 se produjo un intento de golpe de estado y en 2003 varios factores confluyeron para llegar a una situación de desgaste extremo. La violencia estaba permanentemente presente a través de la actividad de grupos paramilitares, a los que recurrían

(67) Para la estructura y el funcionamiento de los partidos políticos en Haití ULLOA, FELIX. “*Financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en Haití*”. Unidad para la Promoción de la Democracia. OEA-Internacional. IDEA.

todos los actores implicados en la lucha política. Ante una crisis de esta dimensión, la inexistencia de un Estado que monopolizara el uso de la fuerza, dio lugar a que la situación fuera incontrolable. Los *Zingledos*, surgieron como bandas armadas de criminales en el período postduvalier. Mediante métodos extremadamente brutales se dedicaron al robo y al tráfico de armas y de drogas. Su expansión fue progresiva al ser contratados por partidos políticos y narcotraficantes. Por su parte, los *Chiméres*, habían sido relacionados con el lumpen conectado con el partido Fanmi Lavalas, podría entenderse como una formación política que arremetía contra todo individuo, grupo o formación antiaristide. Sin embargo, las diferencias fueron progresivamente desapareciendo con respecto al primer grupo de delincuentes.

La situación de violencia incontrolada, una circunstancia ya más permanente que coyuntural, así como las muestras de autoritarismo y de corrupción del gobierno y el enfrentamiento con la oposición llevó a la OEA nuevamente a mediar entre ambos para superar la situación de bloqueo que paralizaba la urgente gestión del país. En el mes de septiembre de 2002, esta organización dictó una resolución en la que consideraba imprescindible el compromiso de las autoridades para acabar con las bandas armadas y para crear unas condiciones que aseguraran la celebración de elecciones legislativas libres. La CD se negó a cooperar en la formación del nuevo Consejo Electoral, aduciendo la violencia e impunidad ejercidas por el gobierno e impidiendo de esta forma salir del impasse político. A mediados de 2003 la oposición formó una nueva coalición, el Grupo 184, compuesto de asociaciones privadas, estudiantes y organizaciones no gubernamentales. Este grupo comenzó a tener más preeminencia que el CD. Esta nueva formación también contó con financiación norteamericana, lo que le permitió radicalizar sus demandas y mantenerlas a pesar de la presión gubernamental. En enero de 2004, el grupo presentó un plan de transición para que el Presidente dejase el poder y se negó a toda colaboración con éste. Con esta posición tampoco fue posible crear un Consejo Electoral y como consecuencia no se pudieron celebrar nuevas elecciones legislativas, como inicialmente solicitó la oposición.

Sin embargo este no era el único frente del gobierno, desde fines de 2002 había comenzado la organización de grupos armados que, desde la frontera de la República Dominicana, comenzaron a realizar actuaciones en contra del gobierno. El crecimiento de estos grupos, a partir de antiguos soldados de las Fuerzas Armadas, desembocó en el derrocamiento de Aristide. Antes de este momento, la situación alcanzó gran tensión política. En Diciembre de 2003, la oposición celebró diferentes manifestaciones, en distintas ciudades del país, exigiendo la

dimisión del gobierno, que fueron duramente reprimidas por la policía y por bandas armadas. Además de las denuncias de la oposición, diferentes miembros del gobierno presentaron su dimisión y dos senadores de Fanmi Lavalas (LF) denunciaron “la demencia del régimen Lavalas” en las manifestaciones de los estudiantes universitarios contra el presidente Aristide. La Iglesia, replegada de la vida política desde la caída de la dictadura, calificó el poder de Lavalas como corrompido, mafioso y sanguinario. Desde la comunidad internacional, al tiempo que los apoyos a Aristide se fueron diluyendo, se propusieron diferentes soluciones pero sin éxito. El 5 de febrero estalló una revuelta armada, en Gonaïves, haciéndose con el norte del país. El 29 de febrero Aristide abandonó el país, después de firmar una carta de denuncia. Desde entonces el ex presidente emprendió una campaña para denunciar que no dejó voluntariamente la presidencia sino que fue obligado por Estados Unidos y Francia.

CONCLUSIONES.

A lo largo de estas páginas hemos pretendido poner de manifiesto que son múltiples los componentes de la crisis haitiana: el déficit democrático, la debilidad institucional, la inexistencia de factores cohesionadores de la sociedad, la polarización social y política, la pobreza (68)... No sólo han sido factores internos los que han ido determinando una Historia marcada por una crisis estructural. La influencia de Estados Unidos ha sido permanente a lo largo de todo el siglo XX (69). Sin embargo, por muy importante que sea, esta influencia no puede explicar todos los problemas de esta sociedad. Los actores implicados, como partidos, movimientos sociales, gobernantes y gobernados, tras superar una larga dictadura, iniciaron un proceso de transición donde la falta de rumbo ha significado la acumulación de retrocesos cada vez más difíciles de superar. Después de la salida de Aristide, se formó un gobierno provisional que, en principio, cuenta con el apoyo de la oposición y con la colaboración de MINUSTAH, la misión de paz de la ONU, para normalizar la situación del país y celebrar elecciones. El principal problema es la persistencia de una violencia incontrolada de bandas armadas que impiden un mínimo de estabilidad para celebrar los comicios, que tendrán lugar a partir de noviembre. Este es uno de los retos a corto plazo del país, sin embargo, el principal y más importante será construir un poder estatal.

(68) CASTRO, GUSTAVO. “Los múltiples componentes de la crisis haitiana”. RESDAL. Octubre 2004. www.resdal.org.

(69) HECTOR, CARY, “*Las cambiantes relaciones entre Estados Unidos y Haití: de la seguridad nacional a la apertura democrática después de la Guerra Fría*” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998. pp. 159-181.

BIBLIOGRAFÍA.

Base de Datos sobre Haití <http://lanic.utexas.edu/la/cb/haiti/>.

“Desafíos a la Seguridad Internacional”. FLACSO-Chile. <http://www.flacso.cl/flacso>.

“Dominican Republic and Haití. 2004”. The Economist.

“El Informe de Desarrollo Humano de 2004”. PNUD

“Haití Country Overview”. World Bank Group. www.worldbank.org/ht.

“Haití: Country Profile. May 2005”. The Economist.

“The World Factbook”. <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ha.html>.

ALDA MEJIAS, SONIA. “El derecho de elección y de insurrección en Centroamérica. Las revoluciones como medio de garantizar elecciones libres” en C. DARDÉ y C. MALAMUD (eds.). Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y América Latina. Universidad de Cantabria 2004.

BRICEÑO VASQUEZ, CARLOS. “Haití. Mito y Realidad. Compendio de su Historia Política, 1789-1988”. Miguel Ángel García e hijo. Caracas 1989.

CASTRO, GUSTAVO. “Los múltiples componentes de la crisis haitiana”. RESDAL. Octubre 2004. www.resdal.org.

DENLINCÉ, KERN, “Les Forces Politiques en Haïti”. Karthala. Paris 1993.

DUPUY, ALEX, “Haiti in the New World Order. The limits of the Democratic Revolution”. Westview Press 1997.

ESCALANTE, FERNANDO. “De la transición al desencanto. Democracia y Estado en América Latina”. <http://clas.uchicago.edu/eventarchive/transicion%20al%20desencanto.pdf>.

ETZER, CHARLES. *Le Pouvoir Politique en Haïti de 1957 a Nos Jours*. Karthala. Paris 1994.

FATTON, ROBERT JR.. “Haiti’s Predatory Republic. The Unending Transition to Democracy”. Lynne Rienner. Oxford 2002.

FERGUSON, JAMES. “Papa Doc Baby Doc. Haiti and the Duvaliers”. Basil Blackwell. Oxford 1988.

GAMARRA, EDUARDO; ROGERS, JOSEPH. “Transiciones perversas y patrones del narcotráfico en Cuba, República Dominicana y Haití” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998.

- HECTOR, CARY, “*Las cambiantes relaciones entre Estados Unidos y Haití: de la seguridad nacional a la apertura democrática después de la Guerra Fría*” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998.
- HECTOR, CARY. “*Democracia y gobernabilidad en Haití: desafíos y perspectivas (1986-2000)*”, en H. DILLA (ed.). Los recursos de la gobernabilidad en la Cuenca del Caribe. Nueva Sociedad. Caracas 2002.
- Informe de la situación de los derechos humanos en Haití. OEA 1988.
<http://www.cidh.oas.org/countryrep/Haiti88sp/indice.htm>.
- LAGUERRE MICHELE, “*Business and Corruption: Framing the Haitian Military Question*” en L. BOBEA (ed.). Soldados y Ciudadanos en el Caribe. FLACSO. Santo Domingo 2002.
- LAGUERRE, MICHAEL. “*The military and Society in Haiti*”. Houndmills Yetc. Macmillan 1993.
- NEIL, RACHEL. “*La reforma policial en Haití: Un triunfo sobre la Historia*” en L. BOBEA (ed.). Soldados y Ciudadanos en el Caribe. FLACSO. Santo Domingo 2002.
- MANIGAT, LESLIE. “De un Duvalier a otro: Itinerario e un fascismo de subdesarrollo”. Monte Avila. Caracas 1972. pp. 47-59.
- MANIGAT, SABINE . “*Haiti en la postguerra fría: La relación cambiante Estado/sociedad*” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998.
- MANIGAT, SABINE. “*Haití 2000: Lavalas en el poder, Lavalas en cuestión*”. Anuario Social y Político de América Latina y El Caribe. FLACSO año 4 2001.
- MARIÑAS OTERO, LUIS. “*Las Constituciones de Haití*”. Ediciones Cultura Hispánica. Madrid 1968.
- MOÏSE CLAUDE; OLLIVIER, ÉMILE. “Repenser Haiti: grandeur et miseres d'un mouvement democratique”. CIDIHCA. Montreal 1991.
- PIERRE GERARD , CHARLES. “*Radiografía de una dictadura. Haití bajo el régimen del doctor Duvalier*”. Editorial Nuestro. México 1969.
- PIERRE CHARLES, GERARD. “*Haití: nuevas etapas de la resistencia popular*”. Revista Nueva Sociedad. N° 73 julio-agosto 1984.
- PIERRE CHARLES, GERARD. “*La revolución democrática en Haití*”, Revista Nueva Sociedad. N° 94 marzo-abril 1998.
- RODRÍGUEZ BERUFF, JORGE. “*Entre la narcodemocracia y el Leviatan “antidrogas”: fuerzas de seguridad, Estado populista y nuevas formas de autoritarismo en el Caribe*” en W. LOZANO (ed.). Cambio político en el Caribe. Escenarios de la posguerra Fría: Cuba, Haití y República Dominicana. FLACSO. Santo Domingo 1998.

- SCHMITTER, PHILIPPE. “*Transitology: The Science or The Art of Democratization?*” en Joseph S. Tulchin and Bernice Romero (eds.). *The Consolidation of Democracy in Latin America*. Lynne Rienner Publishers. London 1995.
- SELLA, ORLANDO E., “*La caída de Aristide. Crónica de una frustración popular*”. Universidad Nacional. Heredia 1996.
- STOTZKY, IRWING. “*Silencing the Guns in Haití, The promise of deliberative democracy*”. The University of Chicago Press. Chicago-London. 1997.
- TROUILLOT, MICHEL-ROLPH. “*State Against Nations*”. Monthly Review Press. New York 1990.
- ULLOA, FELIX. “*Financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en Haití*”. Unidad para la Promoción de la Democracia. OEA-Internacional. IDEA.
- VON GRAFENSTEIN, JOHANNA. “*Haití*”. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Alianza Editorial Mexicana. México D.F. 1988.